



CAPÍTULO SEIS

LA EXTREMA DERECHA REGIONALISTA VALENCIANA

Miquel Ramos

6

El País Valenciano sufre desde los años 70 un conflicto identitario fabricado e impulsado por la derecha y por algunos de los protagonistas del cambio de régimen tras el franquismo. Aunque siempre se denunció esta relación, ha sido a lo largo de los años cuando se han ido mostrando algunos indicios al respecto.

Un ejemplo fue el artículo publicado por el periodista Lucas Marco en *elDiario.es* en septiembre de 2020, en el que desvelaba el testimonio y la documentación que permanecía en manos de Emilio Attard, uno de los redactores de la Constitución de 1978:

Emilio Attard (1915-1997), líder de la UCD valenciana y presidente de la comisión del Congreso de los Diputados que redactó la Constitución de 1978, tenía en su archivo una copia notarial de los estatutos del Grupo de Acción Valencianista (GAV), una pequeña organización anticatalanista que protagonizó gran parte de la violencia callejera contra la izquierda a partir de la Transición. El archivo de Attard, cedido por su sobrino Vicente Navarro de Luján hace unos años a la Biblioteca Valenciana, incluye una carpeta que contiene una copia notarial de los estatutos del GAV, un grupúsculo ultra cuyos dirigentes han sido condenados por episodios de violencia política.

La base de este conflicto identitario es el anticatalanismo y la oposición a cualquier avance o normalización de la lengua valenciana o de las reivindicaciones nacionales y culturales valencianas, usando como argumento un supuesto complot catalán para usurpar las señas de identidad propias. El proyecto político de los Países Catalanes (que clama por la unidad política de los territorios que hablan catalán, es



Los ataques verbales e incluso físicos de grupos ultraderechistas obligan a los participantes en la conmemoración del Día del País Valenciano a alterar su recorrido y a ser escoltados por la Policía. Valencia, 2017. © EVA MÁÑEZ.

decir, Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares y lo que se conoce como *Catalunya Nord*, perteneciente al Estado francés) es el principal argumento del anticatalanismo como movimiento político y de la catalanofobia como prejuicio aglutinador de la casi totalidad de las extremas derechas valencianas y españolas. Aunque la defensa política de los Países Catalanes es minoritaria en el País Valenciano, el anticatalanismo pretende enmarcar en este supuesto plan imperialista catalán a todo aquel que reconozca que valencianos y catalanes comparten lengua.

Esta es la razón por la que el anticatalanismo valenciano inventó una normativa lingüística alternativa a la oficial y reconocida científicamente, que no deja lugar a dudas sobre su pertenencia al sistema lingüístico catalán. Las Normas de El Puig fueron creadas en 1979, en plena Transición, por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), un ente sin reconocimiento científico ni autoridad académica alguna que

abanderaba la batalla contra la unidad de la lengua catalana en el País Valencià, y que ha servido hasta hoy como parapeto pseudocultural de las tesis secesionistas en materia lingüística.

El sector que defiende estas tesis identitarias que enarbolaban la derecha y la extrema derecha principalmente se ha conocido históricamente como «blaverismo», en referencia a la franja azul de la señera, que diferencia la bandera valenciana de la catalana y la aragonesa. El sociólogo Vicent Flor, autor de una tesis doctoral titulada *El anticatalanismo en el País Valencià. Identidad y reproducción social del discurso del blaverismo* (2009), define este movimiento como

«anticatalanista, populista, conservador, regionalista y provincialista que defiende una identidad valenciana regional y subordinada a la identidad nacional española y que, por tanto, se opone frontalmente al valencianismo. [...] Un nacionalismo español que se reviste de autoctonismo, de valencianía que trata de considerar a los valencianistas como “traidores” a la “auténtica” identidad valenciana».

El término «valencianismo» ha sido reivindicado por el blaverismo en oposición a lo que ellos consideran «catalanismo», que alcanzaría a cualquiera que reconociera que valenciano y catalán son la misma lengua. Esta apropiación del valencianismo ha sido posible gracias a los medios de comunicación, que aceptaron ese marco desde el principio y regalaron el adjetivo de «valencianista» al regionalismo valenciano ligado al

nacionalismo español. Así, quienes defendían la normalización de la lengua y la cultura valenciana han sido históricamente estigmatizados como «catalanistas», reforzando la idea de que forman parte de una injerencia foránea.

El sector que defiende las tesis identitarias que enarbolaban la derecha y la extrema derecha principalmente se ha conocido históricamente como «blaverismo», en referencia a la franja azul de la señera

Sin embargo, actualmente, el término valencianismo cada vez se asocia más a lo que antes se estigmatizaba como catalanismo, en parte gracias a la batalla cultural lidiada por el nacionalismo valenciano contra el regionalismo españolista. Este último ha acabado finalmente retratado como un apéndice más del nacionalismo español.

Según Vicent Flor:

La unidad de la lengua o el secesionismo no es lo más importante, a mi juicio. Lo que está en juego es la normalización del valenciano, y el secesionismo es una estrategia para atacarlo. Si conflictivizamos la identidad de la lengua, piensan los anticatalanistas, contribuimos a su desprestigio y dificultamos su recuperación social. Y, en buena medida, lo han conseguido.

Durante los años de la Transición y hasta bien entrado el siglo XXI, el País Valenciano ha sufrido numerosos ataques violentos y atentados terroristas ultraderechistas de tintes anticatalanistas, sin que nunca se haya detenido a los autores. El libro *Matar Joan Fuster* (Astrohongaresa, 2018), del periodista y escritor Francesc Bayarri, documenta los atentados contra el escritor y ensayista valenciano Joan Fuster y otros intelectuales valencianos durante los años 70 y 80. También existen numerosas investigaciones periodísticas de aquellos años que daban cuenta de la impunidad de estas acciones terroristas y otros ataques de la ultraderecha contra personas, entidades y actos relacionados con la izquierda, el valencianismo o la promoción de la lengua valenciana (denominación del catalán del País Valenciano). Más recientemente, se documentaron en [un mapa interactivo en la web de Directa](#) los ataques conocidos de tinte catalanóforo y anticatalanista en este territorio desde los años 60 hasta la actualidad, que superan el medio millar.

Varias entidades presentaron un informe en 2011 en el que detallaron numerosos actos violentos de la extrema derecha en seis años, **entre 2005 y 2011**. Entre ellos, cerca de una veintena con artefactos explosivos. Nunca se identificó a los autores.

El marco ideológico de la catalanofobia y el anticatalanismo en el País Valenciano ha sido sustentado por numerosas organizaciones a lo largo de los últimos cincuenta años. La mayoría de ellas tuvieron como radio de actuación la ciudad de Valencia. Este movimiento no ha tenido prácticamente presencia ni en Castellón ni en Alicante. Muchas de estas organizaciones fueron absolutamente residuales y la mayoría están extintas. Otras sobrevivieron gracias a las subvenciones públicas que les **otorgaron los Gobiernos del PP durante años**. Muchos miembros de estos grupúsculos, que se presentan como defensores de la valencianía auténtica frente a la injerencia catalana, han acabado formando parte del PP, **como fue el caso de varios cargos del partido regionalista Unión Valenciana**, que fue clave para que el PP pudiera gobernar en 1995.

Durante años, la organización anticatalanista más activa fue el **Grup d'Acció Valencianista (GAV)**, que, como se señaló al principio de este artículo, nació en la Transición y fue amparado durante años por las instituciones públicas en manos del PP. Este grupúsculo protagonizó diversos incidentes contra actos valencianistas y de la izquierda valenciana, a quienes acusaban de catalanistas. Tres de sus miembros fueron **condenados en 2003 por asalto y robo** al Casal Jaume I del barrio de Russafa, propiedad de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una entidad



Ultraderechistas que tratan de boicotear la tradicional manifestación del 9 d'Octubre agreden a un fotoperiodista. Valencia, 2017. © EVA MÁÑEZ.

dedicada a la promoción de la lengua y la cultura valenciana. Uno de los condenados, Alejandro Esteve, sigue en activo en otras entidades anticatalanistas y mantiene vínculos con organizaciones neofascistas como Valentia Forum, para quien dio una **conferencia en junio de 2020**.

El GAV protagonizó algunos incidentes junto a militantes del partido neofascista España2000, como el **boicot a la presentación de un libro** sobre el regionalismo valenciano del sociólogo Vicent Flor en 2011 o el **ataque al Correllengua**, un acto por la lengua valenciana en Gandía en 2008, entre otros. En 2002, tras una denuncia del Bloc Nacionalista Valencià (BNV), la Fiscalía estimó que había base para **investigar la relación del GAV con sabotajes impunes**, tal y como lo relató entonces el diario *El País*:

Las páginas 30 y 31 de la revista que edita el GAV, de periodicidad incierta pero cuyo último número se publicó el pasado octubre coincidiendo con su 25.º aniversario, recogen 25 acciones de sabotaje con las que ha tenido relación ese colectivo ultra de posiciones blaveras. Ninguna de ellas mereció en su momento castigo penal, la mayoría no fueron siquiera denunciadas y solo tres investigadas. En esa relación, el GAV obvia una acción por la que sí fue condenado, concretamente en la persona de quien ahora es su presidente, Manuel Latorre, después de que en la campaña de las elecciones generales de 1996 tres militantes del Bloc denunciaran haber sido víctimas de amenazas y lesiones por parte de miembros del grupo anticatalanista.

Uno de los expresidentes de esta entidad, el abogado y **exfalangista Juan García Sentandreu**, es actualmente militante de Vox y aspirante a dirigir la sección valenciana del partido. Tal y como relataba *elDiario.es*, «Sentandreu

ha protagonizado no pocos altercados violentos por los que ha acabado en el juzgado. El político extremista **intentó agredir a Joan Laporta en 2011** cuando el expresidente del FC Barcelona y otros tres diputados catalanes presentaron en Valencia el partido Solidaridad por la Independencia».

El GAV es hoy una entidad residual con escasa repercusión política y mediática, que tan solo organiza actos folclóricos y culturales y que, desde hace unos años, evita relacionarse con otros grupos de extrema derecha. También ha cesado su actividad anterior de enfrentamiento directo, boicots o pintadas.

Sin embargo, otras organizaciones de reciente creación tratan de ocupar el espacio que en su día ocupó el GAV, eso sí, con poco éxito y con estrecha y evidente colaboración de la extrema derecha.

Una de estas es **Defenem València**, un grupúsculo presidido por Marisa Pérez, que en una entrevista **define la entidad como «apolítica»**, que nació para «perseguir el catalanismo» y «echar a los catalanistas del Ayuntamiento de Valencia», gobernado por Compromís y PSPV-PSOE desde 2015. Esta organización ha participado en varios actos **junto a España2000**, Vox y otros grupúsculos de extrema derecha. Su actividad consiste fundamentalmente en la agitación en redes sociales, sobre todo en Facebook, con publicaciones tanto de carácter anticatalanista como nacionalista español, antiinmigración, antifeminista e islamófobo. También **hace acto de presencia en convocatorias de la izquierda valencianista** para mostrar su rechazo.

Otro de los grupos con gran actividad en redes, pero con escasa militancia, es Llibertadors de València i el seu Regne (*sic*), liderado por Enrique Escamilla. Su actividad consiste en denunciar el supuesto plan imperialista catalán para usurpar las señas de identidad valenciana. Para ello, cualquier acto de promoción de la lengua valenciana es señalado

Defenem València es un grupúsculo que nació para «perseguir el catalanismo» y «echar a los catalanistas del Ayuntamiento de Valencia», gobernado por Compromís y PSPV-PSOE desde 2015

como «pancatalanista», puesto que, oficialmente, el valenciano y el catalán son la misma lengua y no existe normativa distinta, algo que reconocen tanto la filología como los entes normativos correspondientes (el Institut d'Estudis Catalans y la Acadèmia Valenciana de la Llengua).

La organización **Mi Tierra Comunidad Valenciana** es otro de los grupúsculos prácticamente unipersonales y testimoniales que quedan en el entorno del anticatalanismo. Liderado por **José Antonio García Herrero**, un conocido cronista de las fiestas de las Fallas, tiene también su principal actividad en redes sociales y tan solo organiza actos en fechas señaladas como el 9 de octubre, día nacional del País Valenciano. En 2020, el acto organizado por esta entidad no logró reunir a más de cuarenta personas; **entre los oradores se encontraba el líder de España2000**, José Luis Roberto.

Según explicaba el periodista Joan Cantarero en un artículo del diario *Público* en abril de 2018 titulado «El cronista fallero lidera con Roberto una reunión para hermanar la ultraderecha en Valencia»:

Herrero ya está empezando a ser considerado un personaje importante dentro del entorno ultra, porque así lo ha decidido Roberto. Tanto es así que por ello fue sentado en un lugar destacado en la mesa presidencial junto a Juan García Sentandreu, abogado e histórico dirigente de la ultraderecha valenciana al frente de la Falange y, en los noventa, del partido Coalición Valenciana, quien en la actualidad lidera la Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia. Antes Pepe Herrero se limitaba a grabar en vídeo las intervenciones de Sentandreu, ahora es uno de ellos.

Por su parte, **el semanario *El Temps* vincularía a Herrero con los Comités de Defensa de Valencia (CDV)**, «una imitación de los Grupos

de Defensa y Resistencia de Cataluña (GDR), que han protagonizado las últimas acciones contra los lazos amarillos (símbolos por la libertad de los políticos y activistas presos por organizar el referéndum catalán), con vínculos con conocidos neonazis y con varias acciones violentas en su historial».

A pesar de la cada vez más marginal presencia e incidencia de estos y otros grupos anticatalanistas, el 9 de octubre de 2017 se vivió un episodio singular en la ciudad de Valencia, tal y como se relataba en el periódico *El Salto*:

Con el referéndum por la independencia celebrado el año 2017 en Cataluña, el anticatalanismo valenciano protagonizaría la que fuera una de las metas más violentas y mediáticas de las últimas décadas: el asalto a la manifestación valencianista del 9 de octubre, una semana después del referéndum. Convocados por redes sociales, cientos de ultras ocuparon la plaza una hora antes de la convocatoria aprovechando la inédita ausencia policial y atacando física y verbalmente a los valencianistas que se acercaban.

Estos incidentes motivaron una enorme respuesta antifascista, que logró reunir a cerca de 15.000 manifestantes el año siguiente. También un exhaustivo trabajo de monitorización de grupos antifascistas logró identificar a la mayoría de los participantes en las agresiones de aquel día, por las que están siendo actualmente investigados cerca de treinta individuos.

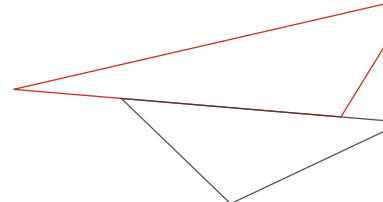
El 11 de noviembre de 2017, la ultraderecha valenciana convergió en una manifestación bajo el lema «Somos valencianos. Somos españoles. No a los Països Catalans». Cerca de 5.000 personas se manifestaron en Valencia tan solo un mes después de las graves agresiones ultraderechistas contra la izquierda valencianista. El semanario *El Temps* retrató a todos los grupúsculos y líderes ultraderechistas que se reunieron en dicho acto, que, según la

revista, evidenció la fractura en el blaverismo y mostró «**el surgimiento de un tejido asociativo minoritario ligado a Vox y a España2000**».

Más allá de los grupúsculos marginales que centran su actividad en redes y en la ciudad de Valencia y alrededores, existen otros colectivos y plataformas que tratan de frenar la normalización lingüística del valenciano y de otras lenguas cooficiales del Estado español. Ese es el objetivo de la **Asociación Hablamos Español**, entidad presidida por Gloria Lago, a quien el diario *Público* define como «**ultranacionalista defensora de Vox**», quien en una entrevista al periódico *El Español* afirmó que «**no creo que una lengua sea una riqueza en sí misma. Ni siquiera es cultura**».



Cerca de doscientos ultraderechistas convocados por España 2000 recorren las calles del barrio obrero de Benimaclet escoltados por 20 furgones y helicópteros de la Policía. Valencia, 12 de octubre de 2020. © EDU LEÓN.



Según su página web, esta asociación es «apartidista sin ánimo de lucro» creada para defender «los derechos lingüísticos de los hispanohablantes». Su principal caballo de batalla es la política lingüística «basada en la libre elección de lengua», es decir, contraria a la inmersión lingüística en los territorios donde existe una lengua cooficial.

Los principios que defiende esta organización son: «elección de lengua vehicular en la enseñanza, bilingüismo en la Administración, no primar el uso de una lengua a la competencia profesional, apertura de la cultura a los creadores en ambas lenguas y que los topónimos prohibidos en español vuelvan a ser oficiales».

La retórica de esta organización trata de presentar a los castellano hablantes como víctimas de una serie de desventajas y discriminaciones en los territorios donde existe otra lengua cooficial. Así, sus objetivos refuerzan este marco victimista:

Que se pueda estudiar en español en toda España. Que el español también esté presente en la Sanidad, edificios oficiales, documentos, información turística, señales de tráfico, etc. Que ser hispanohablante no suponga un impedimento para viajar, establecerte o acceder a una oposición en cualquier lugar de España. Que puedas rotular tu negocio en la lengua que tú quieras. Que no se frustre la creación cultural en español en las comunidades bilingües a causa de las ayudas exclusivas a los creadores que no usen el español. Que los topónimos en español de larga tradición vuelvan a ser oficiales.

Hablamos Español convocó en enero de 2020 una serie de manifestaciones en varias ciudades contra la ley de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana, que trata de impulsar el uso del valenciano en el territorio. En

el sur, donde el valenciano está cada vez más desaparecido, la protesta más multitudinaria tuvo lugar en **Orihuela**, donde miles de personas se manifestaron con pancartas contra el valenciano, denunciando su «tiranía» e «imposición». A la protesta se sumaron políticos de Vox, PP y Cs, así como organizaciones de extrema derecha como El Galeón de Elda.

Esta organización ha desplegado campañas y actos contra la normalización lingüística en Galicia, Cataluña, Baleares y País Valenciano.



Un neonazi de España2000 arranca carteles antifascistas en el barrio obrero de Benimaclet. Valencia, 12 de octubre de 2020. © EDU LEÓN.